



**CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA SOBRE
PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES**

El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Italiana, en adelante denominadas las "Partes Contratantes",

Deseando establecer condiciones favorables para una mayor cooperación económica entre los dos países, y especialmente en relación a la inversión de capitales por inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante;

Y,

Reconociendo que ofrecer incentivos y protección mutua a tal inversión contribuirá a estimular iniciativas empresariales, lo cual fomentará la prosperidad de ambas Partes Contratantes,

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1o. - DEFINICIONES

Para los fines del presente Convenio:

1. El término "inversiones" significará cualquier tipo de propiedad invertida, antes o después de la entrada en vigencia de este Convenio, por una persona natural o jurídica de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, de conformidad con las leyes y reglamentaciones de esa parte, independientemente de la forma legal escogida, así como del marco legal.

Sin limitar la amplitud de lo antedicho, el término "inversión" comprende en particular, pero no exclusivamente:

a) propiedad de bienes muebles e inmuebles y cualquier derecho real, incluyendo derechos reales de garantía sobre la propiedad de una tercera parte, en cuanto sean utilizables para inversiones;

b) participaciones, obligaciones, tenencias de capital u otros instrumentos de crédito, así como títulos del Gobierno y efectos públicos en general conforme a la legislación nacional de cada Parte Contratante;

c) créditos por sumas de dinero o cualquier derecho de servicio que tenga un valor económico relacionado con una inversión, así como ingresos reinvertidos y ganancias de capital;

d) derechos de autor, marcas comerciales registradas, patentes, diseños industriales y otros derechos de propiedad intelectual e industrial, conocimientos tecnológicos, secretos industriales, marcas de comercio y derechos de llave;

e) cualquier derecho económico otorgado por ley o por contrato y cualquier licencia o franquicia concedidos de acuerdo con los dispositivos en vigencia sobre actividades económicas, incluyendo el derecho a explorar, extraer y explotar recursos naturales;

f) cualquier incremento en el valor de la inversión original.

Cualquier modificación en la forma de la inversión no implica un cambio en su naturaleza.

2. El término "inversionista" significará cualquier persona natural o jurídica de una Parte Contratante que invierte en el territorio de la otra Parte Contratante, así como en las sucursales, filiales y dependencias extranjeras, controladas de alguna manera por las personas naturales o jurídicas arriba mencionadas.

3. El término "persona natural", en referencia a una u otra Parte Contratante, significará cualquier persona natural que posea la nacionalidad de ese Estado de acuerdo con sus leyes.

4. El término "persona jurídica", en referencia a una u otra Parte Contratante, significará cualquier entidad que tenga su oficina principal en el territorio de una de las Partes Contratantes y esté reconocida por ella, tales como instituciones públicas y privadas, corporaciones, sociedades de personas, fundaciones y asociaciones, sin considerar si su responsabilidad es o no limitada.

5. El término "ingreso" significará el dinero resultante de una inversión, incluyendo en particular beneficios o intereses, ingresos por intereses, ganancias de capital, dividendos, regalías o pagos por asistencia y servicios técnicos, y cualquier otra forma de pago tales como, mediante materias primas, productos agrícolas, ganado y productos industriales.

6. El presente Convenio se aplicará en el territorio de cada Parte Contratante y en el área marítima adyacente a las costas de cada Parte Contratante hasta el límite de doscientas millas marítimas.

7. "Acuerdo de Inversión" significará un acuerdo entre una Parte Contratante (o sus agencias) y un inversionista de la otra Parte Contratante concerniente a una inversión.

8. "Trato no discriminatorio" significará un trato que sea por lo menos tan favorable como el mejor trato nacional o tratamiento de la nación más favorecida.

9. "Derecho de acceso" significará el derecho a ser admitido para efectuar inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante.

**ARTICULO 2o. - PROMOCION Y PROTECCION DE
INVERSIONES**

1. Ambas Partes Contratantes alentarán a los inversionistas de la otra Parte Contratante a invertir en su territorio.

2. Con las excepciones previstas en el párrafo 2 del Protocolo, los inversionistas de una de las Partes Contratantes tendrán el derecho de acceso a las actividades de inversión, en el territorio de la otra Parte Contratante, en condiciones no menos favorables que aquellas concedidas en el artículo 3.1.

3. Ambas Partes Contratantes asegurarán en todo momento un trato justo y equitativo a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante. Ambas Partes Contratantes asegurarán que la administración, mantenimiento, uso, transformación, goce o asignación de las inversiones efectuadas en sus territorios por inversionistas de la otra Parte Contratante, así como las compañías o empresas en las que estas inversiones han sido efectuadas, no sean en manera alguna sujetas a medidas injustas o discriminatorias.

4. Cada Parte Contratante mantendrá en su territorio un marco legal adecuado para garantizar a los inversionistas la continuidad del trato legal, incluyendo el acatamiento, de buena fé, de todos los compromisos asumidos con respecto a cada inversionista específico.

**ARTICULO 3o. - TRATAMIENTO NACIONAL
Y CLAUSULA DE LA NACION MAS FAVORECIDA**

1. Ambas Partes Contratantes, dentro de los límites de su propio territorio, ofrecerán a las inversiones y actividades asociadas efectuadas por, y el ingreso derivado de, los inversionistas de la otra Parte Contratante, un trato no menos favorable que aquel acordado a las inversiones y actividades asociadas efectuadas por, y el ingreso derivado de, sus propios inversionistas o inversionistas de terceros Estados.

2. En caso que, de la legislación de una de las Partes Contratantes, se establezca un marco legal según el cual a los inversionistas de la otra Parte Contratante se les otorgue un trato más favorable que el previsto en este Convenio, el trato otorgado a los inversionistas de la otra Parte Contratante se aplicará a los inversionistas de la Parte Contratante pertinente también por las inversiones en curso.

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este artículo no hacen referencia a las ventajas y privilegios que una Parte Contratante puede otorgar a los inversionistas de terceros Estados en virtud de su pertenencia a una unión aduanera o unión económica, a un mercado común, a una zona de libre comercio, a un acuerdo subregional o regional, a un acuerdo económico multilateral, o bajo acuerdos firmados para evitar la doble tributación o para facilitar el intercambio comercial fronterizo.

ARTICULO 4o. - COMPENSACION POR DAÑOS Y PERDIDAS

Si los inversionistas de una de las Partes Contratantes incurren en pérdidas o daños sobre sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante debido a guerras, otras formas de conflicto armado, estado de emergencia, revueltas civiles u otros eventos similares, la Parte Contratante en la cual la inversión ha sido efectuada ofrecerá una compensación adecuada con respecto de tales pérdidas o daños, independientemente de que tales pérdidas o daños hayan sido causados por fuerzas gubernamentales u otros sujetos. Los pagos por compensación serán libremente transferibles sin demora indebida.

Los inversionistas en cuestión recibirán el mismo trato que los inversionistas de la otra Parte Contratante y, en todo caso, en condiciones no menos favorables que a los inversionistas de terceros Estados.

**ARTICULO 5o - NACIONALIZACION, EXPROPIACION
Y MEDIDAS EQUIVALENTES**

1. Las inversiones a las que se refiere este Convenio no estarán sujetas a ninguna medida que pueda limitar el derecho de propiedad, posesión, control o goce de las inversiones, temporal o permanentemente, salvo donde esté específicamente estipulado por las actuales legislaciones locales o nacionales, reglamentos y órdenes emitidos por las autoridades competentes.

2. Las inversiones de inversionistas de una de las Partes Contratantes no serán "de jure" o "de facto", directa o indirectamente, nacionalizadas, expropiadas o sujetas a cualquier medida que tenga un efecto equivalente en el territorio de la otra Parte Contratante, excepto por necesidad pública o interés nacional y a cambio de una compensación completamente efectiva e inmediata, y bajo la condición de que estas medidas se tomen de acuerdo a una base no discriminatoria, y de conformidad con todas las disposiciones y procedimientos legales.

3. La compensación justa será establecida sobre la base de valores de mercado reales inmediatamente antes del momento en que se anuncie o se haga pública la decisión de nacionalizar o expropiar. En ausencia de un entendimiento entre la Parte Contratante receptora de la inversión y el inversionista durante el proceso de nacionalización o expropiación, la compensación se basará en los mismos parámetros de referencia y tasas de cambio, tomados en consideración en los documentos para la constitución de la inversión.

La tasa de cambio aplicable a tal compensación será la prevaleciente en la fecha inmediatamente anterior al momento en que la nacionalización o expropiación haya sido anunciada o hecha pública.

4. La compensación será considerada como efectiva si fuera pagada en la misma moneda en que el inversionista extranjero llevó a cabo la inversión, en tanto tal moneda sea -o permanezca- convertible o, de lo contrario, en cualquier otra moneda aceptada por el inversionista.

5. La compensación será considerada como puntual si ocurre sin demora indebida.

6. La compensación deberá incluir los intereses calculados de acuerdo a una tasa LIBOR de seis meses desde la fecha de nacionalización o expropiación hasta la fecha de pago.

7. Un nacional o compañía de una de las Partes Contratantes que afirme que, todas o parte de sus inversiones, han sido expropiadas tendrá derecho a una pronta revisión por parte de las autoridades judiciales o administrativas apropiadas de la otra Parte Contratante para determinar todas las razones con relación a ello.

8. En ausencia de un acuerdo entre el inversionista y la autoridad responsable, el monto de la compensación será establecido de conformidad con los procedimientos para solución de controversias establecidos en el artículo 9 de este Convenio. La compensación será libremente transferible.

9. Las disposiciones del párrafo 2 de este artículo se aplicarán también a los beneficios derivados de una inversión y en el caso de clausura, a los ingresos provenientes de los procedimientos de liquidación.

10. Si luego de la expropiación o medidas equivalentes, el bien en cuestión no ha sido utilizado, total o parcialmente, para un propósito público, el propietario o sus designados están autorizados a comprar nuevamente los bienes al precio del mercado, en el entendido que esta disposición está contenida en la legislación de ambas Partes Contratantes.

ARTICULO 6o. - REPATRIACION DE CAPITAL, GANANCIAS E INGRESOS

1. Cada una de las Partes Contratantes deberá garantizar que los inversionistas de la otra Parte Contratante puedan transferir al exterior, sin demora indebida, en cualquier moneda convertible, lo siguiente:

a) capital y capital adicional, incluyendo ingresos reinvertidos, utilizados para mantener e incrementar la inversión;

b) el ingreso neto, dividendos, regalías, pagos por asistencia y servicios técnicos, intereses y otras ganancias;

c) el ingreso derivado de la venta total o parcial, o de la liquidación total o parcial de una inversión;

d) fondos para reembolsar préstamos relacionados con una inversión y el pago de los intereses relacionados;

e) remuneración y asignaciones pagadas a nacionales de la otra Parte Contratante por trabajo y servicios prestados, en relación a una inversión efectuada en el territorio de la otra Parte Contratante, en el monto y manera previstos por la legislación nacional y la reglamentación vigentes.

2. Sin restringir el alcance del artículo 3 del presente Convenio, las Partes Contratantes se comprometen a someter a las transferencias mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo el mismo tratamiento favorable acordado a las inversiones efectuadas por inversionistas de terceros Estados, en caso éste sea más favorable.

ARTICULO 7o. - SUBROGACION

En caso que una Parte Contratante o su agencia autorizada haya otorgado una garantía respecto a riesgos no comerciales para la inversión efectuada por uno de sus inversionistas en el territorio de la otra Parte Contratante, y haya efectuado el pago a dicho inversionista en base a la citada garantía, la otra Parte Contratante deberá reconocer la subrogación de los derechos del inversionista a la primera Parte Contratante mencionada. En relación a la transferencia de pagos a la Parte Contratante o a su agencia autorizada en virtud de esta asignación, deberán aplicarse las disposiciones de los artículos 4, 5 y 6 del presente Convenio.

ARTICULO 8o. - PROCEDIMIENTOS DE TRANSFERENCIA

1. Las tranferencias mencionadas en los artículos 4, 5, 6 y 7 deberán llevarse a cabo, sin un retraso indebido, dentro de un plazo de seis meses después que todas las obligaciones fiscales hayan sido cumplidas, así como deberán efectuarse en una moneda convertible. Todas las transferencias deberán realizarse a la tasa de cambio prevaleciente en la fecha en que el inversionista solicite la transferencia en cuestión, con la excepción de las disposiciones del párrafo 3 del artículo 5 concerniente a la tasa de cambio aplicable en caso de nacionalización o expropiación.

2. Las obligaciones fiscales, según el párrafo anterior, son consideradas cumplidas cuando el inversionista haya seguido los procedimientos estipulados por las leyes de la Parte Contratante en cuyo territorio se ha efectuado la inversión.

ARTICULO 9o. - ARREGLO DE CONTROVERSIAS ENTRE INVERSIONISTAS Y PARTES CONTRATANTES

1. Cualquier controversia que pueda surgir entre una de las Partes Contratantes y los inversionistas de la otra Parte Contratante sobre las inversiones, incluyendo las controversias relativas al monto de la compensación, deberá ser resuelta, en la medida de lo posible, amigablemente.

2. En caso que el inversionista y una agencia de una de las Partes Contratantes hayan estipulado un acuerdo de inversión, deberá aplicarse el procedimiento previsto en dicho acuerdo.

3. En caso que dichas controversias no puedan ser resueltas amigablemenete dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de la solicitud escrita de arreglo, el inversionista en cuestión puede someter, a su elección, la controversia para el arreglo a:

a) la Corte de la Parte Contratante que tenga la jurisdicción territorial;

b) el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, para la implementación de los procedimientos de arbitraje según la Convención de Washington, de 18 de marzo de 1965, para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, si es que o tan pronto como ambas Partes Contratantes hayan accedido a élla;

c) un Tribunal de Arbitraje ad hoc de conformidad con el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y la Parte Contratante receptora de la inversión se compromete por el presente documento a aceptar la referencia a dicho arbitraje.

4. Ambas Partes Contratantes se abstendrán de negociar a través de canales diplomáticos cualquier asunto relacionado con un procedimiento de arbitraje judicial en marcha hasta que estos procedimientos hayan sido concluidos y una de las Partes Contratantes no haya cumplido con el fallo del Tribunal de Arbitraje o de la Corte dentro del período previsto en el fallo, o también dentro del período que puede ser determinado en base a las disposiciones de la ley internacional o interna que pueden ser aplicadas al caso.

ARTICULO 10o. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES

1. Cualquier controversia que surja entre las Partes Contratantes en relación con la interpretación y aplicación del presente Convenio deberá, en la medida de lo posible, ser resuelta amigablemente a través de canales diplomáticos.

2. En caso que la controversia no pueda ser resuelta amigablemente dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha en la cual una de las Partes Contratantes notifique por escrito a la otra Parte Contratante, ésta, a solicitud de una de las Partes Contratantes, será elevada ante un Tribunal de Arbitraje ad hoc según lo estipulado en el presente artículo.

3. El Tribunal de Arbitraje deberá estar establecido de la siguiente manera: dentro de un plazo de dos meses a partir del momento en que se recibió la solicitud de arbitraje, cada una de las Partes Contratantes deberá designar a un miembro del Tribunal. Dichos miembros elegirán, en calidad de Presidente, a un nacional de un tercer Estado. El Presidente deberá ser designado en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que fueron designados los otros dos miembros.

4. Si, dentro del período especificado en el párrafo 3 del presente artículo, no han sido efectuadas las designaciones, cada una de las Partes Contratantes puede, en ausencia de cualquier otro arreglo, pedir al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que realice la designación. En el caso que el Presidente de la Corte sea un nacional de una de las Partes Contratantes o sea, por alguna razón, imposible para él efectuar la designación, la solicitud deberá hacerse al Vice-Presidente de la Corte. Si el Vice-Presidente de la Corte es nacional de una de las Partes Contratantes o es incapaz de efectuar la designación por alguna razón, el miembro más antiguo de la Corte Internacional de Justicia, que no sea nacional de una de las Partes Contratantes, será invitado a realizar la designación.

5. El Tribunal de Arbitraje decidirá por mayoría de votos y sus decisiones serán obligatorias. Ambas Partes Contratantes pagarán los gastos de sus propios árbitros y de sus representantes en las audiencias. Los gastos del Presidente y cualesquiera otros serán divididos equitativamente entre las Partes Contratantes. El Tribunal de Arbitraje establecerá sus propios procedimientos.

ARTICULO 11o. - RELACIONES ENTRE LOS GOBIERNOS

Las disposiciones de este Convenio se aplicarán independientemente de que las Partes Contratantes tengan o no relaciones diplomáticas o consulares.

ARTICULO 12o. - APLICACION DE OTRAS DISPOSICIONES

1. Si un problema es regulado tanto por este Convenio como por otro Convenio Internacional en el cual ambas Partes Contratantes sean signatarias o por disposición del derecho internacional general, las disposiciones más favorables se aplicarán a las Partes Contratantes y a sus inversionistas.

2. Cuando el trato acordado por una de las Partes Contratantes para los inversionistas de la otra Parte Contratante, de acuerdo con sus leyes y reglamentaciones u otras disposiciones o contratos específicos, u autorizaciones o acuerdos de inversión, sea más favorable que aquel estipulado por este Convenio, se aplicará el trato más favorable.

3. Cuando, luego de la fecha en que la inversión ha sido efectuada, deba ocurrir una modificación en la legislación del país en que la inversión ha sido efectuada, no serán afectados los derechos adquiridos conferidos al inversionista por medio de una legislación previa.

ARTICULO 13o - ENTRADA EN VIGOR

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha en que las dos Partes Contratantes se notifiquen mutuamente que sus respectivos procedimientos legales han sido completados.

ARTICULO 14o. - DURACION Y TERMINACION

1. El presente Convenio permanecerá en vigencia por un período de 15 años desde la fecha de la notificación, de acuerdo al artículo 13, y seguirá vigente por períodos sucesivos de 10 años, a menos que una de las Partes Contratantes lo denuncie por escrito, a más tardar un año antes de su fecha de vencimiento.

2. En el caso de inversiones efectuadas antes de la fecha de vencimiento, como se estipula en el párrafo 1 de este artículo, las disposiciones de los artículos 1 al 12 permanecerán en vigencia por 10 años más, a partir de las fechas arriba mencionadas.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos, han suscrito el presente Convenio.

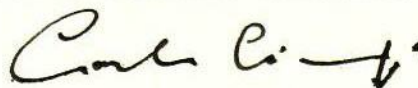
HECHO en Roma, a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, en dos ejemplares, uno en castellano y otro en italiano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DEL PERU



EFRAIM GOLDENBERG SCHREIBER
Presidente del Consejo de
Ministros y Ministro de
Relaciones Exteriores

POR EL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA ITALIANA



CARLO AZEGLIO CIAMPI
Presidente del
Consejo de Ministros

PROTOCOLO

Al momento de la firma del Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Italiana sobre Promoción y Protección de Inversiones, las Partes Contratantes han acordado también las siguientes cláusulas, que formarán parte integrante del Convenio.

Disposiciones Generales

El presente Convenio y todas sus disposiciones referidas a "Inversiones" se aplicarán - según lo dispuesto en la legislación de las Partes Contratantes - también a:

- a) el incremento del valor de la inversión;
- b) las siguientes actividades asociadas:
la organización, control, operación, mantenimiento y disposición de compañías, dependencias, agencias, oficinas, fábricas u otras facilidades para la conducción de negocios; la elaboración, cumplimiento y ejecución de contratos; la adquisición, uso, protección y disposición de propiedad de todos los tipos incluyendo propiedad intelectual; el préstamo de fondos; la compra, emisión y venta de acciones de capital y otros títulos; y, la compra de moneda para importaciones.

"Actividades Asociadas" incluye también:

- i) la concesión de franquicias o derechos bajo licencias;
- ii) registros, licencias, permisos y otras autorizaciones necesarias para la conducción de la actividad comercial que deberán, en todo caso, ser emitidas expeditivamente, como se estipula en la legislación de las partes;
- iii) el acceso a instituciones financieras en cualquier moneda, y a créditos y mercados de monedas;

iv) el acceso a fondos depositados en instituciones financieras;

v) la importación e instalación del equipo necesario para la normal conducción de asuntos de negocios, lo que incluye, pero sin limitarse a ello, equipos de oficina y automóviles, y la exportación de cualquier equipo y automóviles importados de esta manera;

vi) la divulgación de la información comercial;

vii) la conducción de estudios de mercado;

viii) la designación de representante comercial, lo que incluye agentes, consultores, y distribuidores (i.e., mediadores en la distribución de productos que ellos mismos no hayan producido), e igualmente la prestación de servicios, y su participación en ferias comerciales y otros eventos promocionales;

ix) el "marketing" de bienes y servicios, incluyendo el que se efectúa a través de la distribución interna y los sistemas de marketing, así como por publicidad y contacto directo con nacionales y compañías; y,

x) pago por bienes y servicios en moneda local.

2. Con referencia al artículo 2

a) La Parte Contratante estipulará con los inversionistas de la otra Parte Contratante, quienes efectúen inversiones de interés nacional en su territorio, un acuerdo de inversión, según lo dispuesto en la legislación de las Partes Contratantes, el cual regirá las relaciones legales específicamente relacionadas con la citada inversión.

b) Ninguna de las Partes Contratantes establecerá condiciones para la creación, expansión o continuación de inversiones, que pueden implicar el asumir o el imponer cualquier obligación para la exportación de producción, y que especifiquen que los bienes tienen que ser adquiridos localmente, o condiciones similares.

c) Cada Parte Contratante proporcionará medios efectivos para interponer demandas y hacer valer derechos con respecto a inversiones y autorizaciones relacionadas a ellas y acuerdos de inversión.

d) A los nacionales de ambas Partes Contratantes autorizados a trabajar en el territorio de la otra Parte Contratante en conexión con una inversión según el presente Convenio se les otorgarán condiciones adecuadas de trabajo para realizar sus actividades profesionales, de conformidad con la legislación de la Parte Contratante donde se efectúa la inversión.

e) Los nacionales de cualquiera de las Partes Contratantes tendrán permiso de entrar y de permanecer en el territorio de la otra Parte Contratante, con el propósito de establecer, desarrollar, administrar o asesorar con respecto a la operación de inversión, por la cual ellos, o una compañía de la primera Parte Contratante que los emplee, se comprometan o estén por comprometer un monto sustancial de capital o por otras razones.

f) A las compañías que estén legalmente constituidas bajo las leyes aplicables o bajo reglamentaciones de una Parte, se les permitirá contratar a personal de alta gerencia de su elección, independientemente de su nacionalidad, de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante.

3. Con referencia al artículo 3

a) A todas las actividades relacionadas con la adquisición, venta y transporte de materias primas y procesadas, energía, combustibles y medios de producción, así como también a cualquier otra clase de operación relacionada con ellas y que de alguna manera estén vinculadas con las actividades empresariales bajo el presente Convenio, se les acordará, en el territorio de cada Parte Contratante, un tratamiento no menos favorable que el acordado para actividades e iniciativas similares efectuadas por los residentes nacionales o inversionistas de un tercer Estado.

b) Cada Parte Contratante regulará, de acuerdo con sus leyes y reglamentaciones y tan favorablemente como le sea posible, los problemas relacionados con la entrada, establecimiento, trabajo y desplazamiento en su territorio de los nacionales de la otra Parte Contratante, y de los miembros de sus familias que realizan actividades relacionadas con inversiones bajo este Convenio.

4. Con referencia al artículo 5

Será considerada como nacionalización o expropiación de un inversionista de una de las Partes Contratantes, una medida de nacionalización o expropiación de bienes o derechos pertenecientes a una compañía controlada por los inversionistas, así como también sustraer los recursos financieros de la compañía u otros activos, o también reducir sustancialmente el valor de los mismos.

5. Con referencia al artículo 9

Bajo el artículo 9 (3) (c), el arbitraje será llevado a cabo de conformidad con los estándares de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), tal como se estableció en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 31/98, de 15 de diciembre de 1976, así como también de acuerdo a las siguientes disposiciones:

a) El Tribunal de Arbitraje lo conformarán tres árbitros; si éstos no son nacionales de ninguna de las Partes Contratantes, serán nacionales de Estados que tengan relaciones diplomáticas con ambas Partes Contratantes.

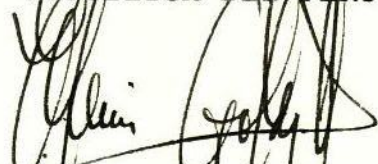
El nombramiento del árbitro, cuando sea necesario de acuerdo a las Reglas del CNUDMI, será convenido mutuamente por ambas Partes Contratantes. Las dos Partes Contratantes también acordarán el lugar donde el arbitraje tendrá lugar.

b) Al emitir su decisión, el Tribunal de Arbitraje aplicará las disposiciones contenidas en este Convenio, así como las reglas del CNUDMI sobre esta cuestión específica.

El reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral en el territorio de las Partes Contratantes serán regulados por las respectivas legislaciones nacionales, en cumplimiento con las Convenciones internacionales suscritas por ellas.

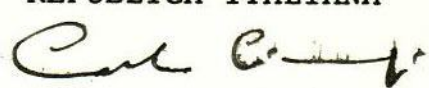
HECHO en Roma, a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, en dos ejemplares, uno en castellano y el otro en italiano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DEL PERU



EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Presidente del Consejo de
Ministros y Ministro de
Relaciones Exteriores

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ITALIANA



CARLO AZEGLIO CIAMPI
Presidente del
Consejo de Ministros

**ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica del Perù ed il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito denominati Parti Contraenti,

desiderosi di creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare con riferimento agli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e,

consapevoli che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimenti" si intende ogni bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento.

Fatta salva la portata generale di quanto sopra, il termine "investimenti" indica in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni diritto di proprietà in rem, compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimenti;
- b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli dello Stato e pubblici in genere, ai sensi della legislazione nazionale di ciascuna Parte Contraente;

- c) crediti finanziari, o qualsiasi altro diritto per il servizio avente valore economico, relativi ad investimenti, nonché i redditi reinvestiti e gli utili da capitale;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali registrati, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know how, segreti industriali, nomi commerciali e avviamento;
- e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciate in conformità alle vigenti disposizioni in merito all'esercizio di attività economiche, ivi compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;
- f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non comporta un cambiamento della sua natura.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le succursali, filiali ed affiliate estere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche.

3. Per "persona fisica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità di tale Parte, in conformità alle leggi in essa vigenti.

4. Per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entità che abbia sede nel territorio di una di esse e sia da quest'ultima riconosciuta, come ad esempio istituzioni pubbliche o private, società di capitali, società di persone, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, utili o interessi, utili da interessi, utili da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici ed ogni altra forma di pagamento, come ad esempio a mezzo di materie prime, prodotti agricoli, bestiame e prodotti industriali.

6. Il presente Accordo si applica sul territorio di ciascuna Parte Contraente e nelle acque territoriali di ciascuna Parte Contraente, fino ad un limite di duecento miglia marine.

7. Per "accordo sugli investimenti" si intende un accordo tra una Parte (o sue Agenzie) ed un investitore dell'altra Parte, che abbia per oggetto un investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o quanto quello della nazione più favorita.

9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto ad avere la possibilità di effettuare un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 2 - PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.

2. Fatte salve le eccezioni previste al punto 2 del Protocollo, gli investitori di una Parte Contraente avranno il diritto di accesso alle attività di investimento sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle previste all'art. 3.1.

3. Entrambe le Parti Contraenti dovranno sempre garantire un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte. Entrambe le Parti Contraenti dovranno garantire che la gestione, il trattamento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e le imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie.

4. Ciascuna Parte Contraente dovrà mantenere sul proprio territorio un quadro giuridico idoneo a garantire agli investitori la continuità di trattamento giuridico, incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore.

**ARTICOLO 3 - TRATTAMENTO NAZIONALE E
CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA**

1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, dovranno accordare agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché alle attività a questi associate ed agli utili che ne derivino, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti effettuati dai propri investitori o investitori di Stati terzi, nonché alle attività a questi associate ed agli utili che ne derivino.

2. Laddove dalla legislazione di una delle Parti Contraenti risultasse un quadro normativo in base al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori dell'altra Parte sarà applicato agli investitori della Parte Contraente in causa anche per i rapporti in corso.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una delle Parti Contraenti può accordare ad investitori di Stati terzi in ragione della loro appartenenza ad un'Unione economica o doganale, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale, oppure ad un Accordo per evitare la doppia imposizione o per favorire gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4 - RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE

Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte a causa di guerre o di altre forme di conflitto armato, di stato di emergenza, di guerre civili o altri eventi analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento dovrà fornire un adeguato risarcimento per dette perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti per risarcimento saranno liberamente trasferibili e avranno luogo senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per gli investitori dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto ad investitori di Stati terzi.

ARTICOLO 5 - NAZIONALIZZAZIONI, ESPROPRI E MISURE EQUIVALENTI

1. Gli investimenti cui si riferisce il presente Accordo non dovranno essere soggetti ad alcuna misura che possa limitarne, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, di possesso, di controllo o di godimento, ad eccezione di quanto specificatamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative nazionali o locali, da regolamenti o da provvedimenti disposti dalle competenti autorità.

2. Gli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non dovranno essere "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a qualsiasi misura che abbia un effetto equivalente sul territorio dell'altra Parte Contraente, eccetto che per scopi di interesse pubblico o nazionale ed in cambio di un immediato, pieno ed effettivo risarcimento, ed a condizione che queste misure vengano prese su base non discriminatoria ed in conformità con tutte le disposizioni e le procedure giuridiche.

3. Il giusto risarcimento sarà calcolato sulla base dei reali valori di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o espropriazione siano state annunciate o rese pubbliche. In assenza di un'intesa tra la Parte Contraente ospitante l'investimento e l'investitore durante le procedure di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento sarà determinato sulla base degli stessi parametri di riferimento e degli stessi tassi di cambio presi in considerazione nella documentazione concernente la costituzione dell'investimento.

Il tasso di cambio applicabile a tale risarcimento dovrà essere quello prevalente alla data immediatamente precedente il momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano annunciati o resi noti.

4. Il risarcimento sarà considerato effettivo se sarà stato corrisposto nella stessa valuta in cui l'investimento era stato realizzato dall'investitore straniero, nella misura in cui quella valuta è o rimane convertibile oppure, viceversa, in ogni altra valuta accettata dall'investitore.

5. Il risarcimento verrà considerato puntuale se avverrà senza indebito ritardo.

6. Il risarcimento sarà comprensivo degli interessi calcolati al tasso LIBOR su base semestrale a partire dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data del pagamento.

7. Un cittadino o un'impresa di una delle Parti Contraenti che asserisca che una parte o la totalità dei propri investimenti sia stata espropriata avrà diritto ad una sollecita revisione del provvedimento da parte delle Autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte allo scopo di determinare tutte le questioni ad esso attinenti.

8. In mancanza di un accordo tra l'investitore e l'Autorità competente, l'ammontare del risarcimento sarà determinato secondo le procedure per la composizione delle controversie di cui all'articolo 9 del presente Accordo. I risarcimenti saranno liberamente trasferibili.

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche ai profitti derivanti da un investimento, nonché, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.

10. Se, a seguito di espropriazione o misura equivalente, il bene in questione non è stato interamente o parzialmente utilizzato a scopi pubblici, il proprietario o i suoi assegnatari hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato, sempreché questa disposizione sia prevista dalla legislazione di entrambe le Parti Contraenti.

ARTICOLO 6 - RIMPATRIO DEI CAPITALI, PROFITTI E REDDITI

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà agli investitori dell'altra Parte il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo ed in ogni valuta convertibile, di:

- a) capitali e quote aggiuntive di capitali, ivi compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;
- b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro tipo di utile;
- c) somme derivanti dalla vendita totale o parziale, o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
- d) somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento e al pagamento dei relativi interessi;

e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da attività e servizi prestati in relazione agli investimenti effettuati sul territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora più favorevole.

ARTICOLO 7 - SURROGA

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua agenzia autorizzata abbia concesso una garanzia contro rischi non-commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore in base alla garanzia concessa, quest'ultima Parte riconoscerà la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento di pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua agenzia autorizzata in virtù di tale cessione, verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI TRASFERIMENTO

1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno avere luogo senza indebito ritardo, e comunque entro sei mesi una volta assolti tutti gli obblighi fiscali, e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio ufficiale vigente alla data in cui l'investitore ne faccia richiesta, fatto salvo quanto disposto all'Articolo 5 paragrafo 3 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si considereranno assolti quando l'investitore abbia ottemperato alle procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale l'investimento è stato realizzato.

**ARTICOLO 9 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI**

1. Le controversie che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte in merito agli investimenti, ivi comprese quelle sull'ammontare del risarcimento, saranno, per quanto possibile, risolte in via amichevole.

2. Laddove l'investitore ed un'entità di una Parte Contraente abbiano stipulato un Accordo sugli investimenti, verrà applicata la procedura prevista da tale Accordo.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:

- a) ai tribunali della Parte Contraente competenti per territorio;
- b) al "Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative ad investimenti" per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito;
- c) ad un tribunale arbitrale "ad hoc", in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), alle cui decisioni la Parte Contraente ospitante accetta di sottoporsi.

4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario in corso, finché le relative procedure non siano state concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale arbitrale o alla sentenza del Tribunale ordinario adito, entro i termini di adempimento prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alle norme di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

**ARTICOLO 10 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
TRA LE PARTI CONTRAENTI**

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente attraverso canali diplomatici.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte amichevolmente nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte, esse saranno, per iniziativa di una delle Parti, sottoposte ad un tribunale arbitrale ad hoc in conformità con le disposizioni del presente Articolo.

3. Il tribunale arbitrale verrà costituito nel seguente modo: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle Parti nominerà un membro del tribunale. Questi due membri sceglieranno quindi, in qualità di Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non siano ancora state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altra intesa, chiedere di provvedervi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi abbia la cittadinanza di una delle Parti Contraenti, o per qualunque motivo gli fosse impossibile procedere alle nomine, la richiesta verrà rivolta al Vice-Presidente della Corte. Ove anche il Vice-Presidente fosse cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualunque motivo gli fosse impossibile procedere alle nomine, vi provvederà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il tribunale arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle Parti Contraenti in eguale misura. Il tribunale arbitrale stabilirà le proprie modalità procedurali.

ARTICOLO 11 - RELAZIONI TRA I GOVERNI

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12 - APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI VARIE

1. Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui siano firmatarie entrambe le Parti Contraenti, ovvero da norme generali di diritto internazionale, verranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi sugli investimenti, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

3. Qualora, successivamente alla data in cui l'investimento è stato effettuato, intervenga una variazione nella legislazione del Paese nel quale l'investimento ha avuto luogo, i diritti acquisiti dall'investitore in virtù della precedente legislazione non saranno modificati.

ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche.

ARTICOLO 14 - DURATA E SCADENZA

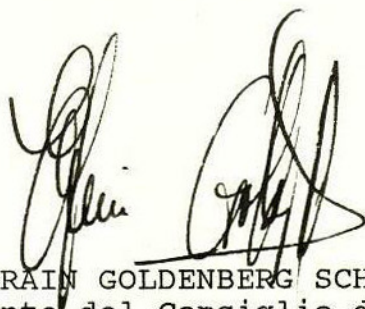
1. Il presente Accordo avrà durata di 15 anni a partire dalla data dell'avvenuta notifica di cui all'Articolo 13 e rimarrà in vigore per un successivo periodo di 10 anni, salvo che una delle Parti lo denunci per iscritto con un preavviso di un anno dalla data di scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni a partire dalle date predette.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

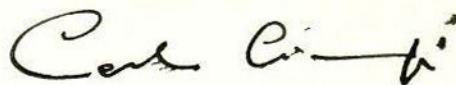
Fatto a Roma, il cinque del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantaquattro, in due esemplari, in lingua castigliana ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL PERU'



EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro degli Affari Esteri

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



CARLO AZEGLIO CIAMPI
Presidente del
Consiglio dei Ministri

P R O T O C O L L O

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica del Perù ed il Governo della Repubblica Italiana sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno concordato le seguenti clausole che si considereranno parte integrante dell'Accordo stesso.

Disposizioni Generali

Il presente Accordo e tutte le disposizioni in esso contenute con riferimento agli "investimenti" si applicano - come previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti - anche a:

- a) l'incremento di valore degli investimenti;
- b) le seguenti attività associate: organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di imprese, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture per la gestione commerciale; la redazione, l'applicazione, la gestione di contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la cessione di qualunque tipo di proprietà compresa quella intellettuale; la accensione di prestiti, l'acquisto, l'emissione e la vendita di azioni ed altri titoli e l'acquisto di valuta per importazioni.

Le "attività associate" comprendono altresì:

- i) la concessione di franchigie o diritti inerenti a licenze;
- ii) registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessari per condurre attività commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati speditamente, come sancito dalla legislazione delle due Parti;
- iii) accesso alle istituzioni finanziarie in qualsiasi valuta, ai crediti ed ai mercati valutari;

- iv) accesso ai fondi posseduti dalle istituzioni finanziarie;
- v) l'importazione e l'installazione delle attrezzature necessarie per la gestione commerciale ordinaria, ivi comprese, ma non soltanto, le attrezzature d'ufficio e le automobili, e l'esportazione di qualsiasi attrezzatura ed automobile così importata;
- vi) la divulgazione di informazioni commerciali;
- vii) la realizzazione di indagini di mercato;
- viii) la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi gli agenti, i consulenti ed i distributori (cioè mediatori nel settore della distribuzione dei prodotti non fabbricati dai medesimi), i servizi prestati dagli stessi in tali qualità nonché la loro partecipazione a fiere ed altri eventi promozionali;
- ix) la commercializzazione di merci e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni o a mezzo di pubblicità e contatti diretti con cittadini e imprese; e
- x) il pagamento di beni e servizi in valuta locale.

2. In riferimento all'Articolo 2

a) Le Parti Contraenti concluderanno con investitori dell'altra Parte, che operino investimenti di interesse nazionale nel loro territorio, un accordo in materia di investimenti, sulla base della legislazione delle Parti Contraenti, che regolerà gli specifici rapporti giuridici derivanti da tali investimenti.

b) Nessuna delle Parti Contraenti porrà condizioni per la creazione, l'ampliamento o il proseguimento di investimenti che possano comportare l'assunzione o l'imposizione di obblighi inerenti l'esportazione della produzione e che specifichino che le merci debbano essere acquisite localmente, o condizioni analoghe.

c) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi effettivi per avanzare reclami e per far valere diritti relativi ad investimenti, autorizzazioni ad essi connesse e accordi in materia di investimenti.

d) Ai cittadini di ciascuna Parte Contraente, autorizzati a prestare un'attività lavorativa sul territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, verranno assicurate condizioni di lavoro adeguate al fine di svolgere le loro attività professionali, conformemente alla legislazione della Parte Contraente ove ha luogo l'investimento.

e) I cittadini di ciascuna Parte Contraente verranno autorizzati ad entrare e soggiornare nel territorio dell'altra Parte Contraente al fine di creare, sviluppare, gestire o fornire consulenza in merito all'operazione di un investimento rispetto al quale essi, o un'impresa della prima Parte che li impieghi, abbiano impegnato o si apprestino ad impegnare consistenti somme di capitali o per altri fini.

f) Le imprese legalmente costituite sulla base di leggi o regolamenti vigenti in una delle Parti saranno autorizzate ad assumere personale ai massimi livelli dirigenziali, indipendentemente dalla nazionalità e conformemente alla legislazione di detta Parte.

3. In riferimento all'Articolo 3

a) A tutte le attività connesse con l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e trasformate, di fonti energetiche, combustibili e mezzi di produzione, come pure ad ogni altro tipo di operazioni a ciò correlate e in qualche modo legate ad attività imprenditoriali, ai sensi del presente Accordo dovrà essere accordato, sul territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ad analoghe attività ed iniziative intraprese da cittadini residenti o investitori di un Paese terzo.

b) Ciascuna Parte Contraente gestirà, sulla base delle proprie leggi e regolamenti e nel modo più favorevole possibile, tutti i problemi legati all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e alla

circolazione sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte e dei loro familiari che svolgano attività connesse agli investimenti previsti dal presente Accordo.

4. In riferimento all'articolo 5

Sarà considerata nazionalizzazione o esproprio di un investitore di una delle Parti Contraenti ogni misura di nazionalizzazione o esproprio di merci o diritti appartenenti ad un'impresa controllata dall'investitore, come pure la sottrazione di risorse finanziarie o di altri beni all'impresa o, viceversa, ogni misura che riduca sostanzialmente il valore della stessa.

5. In riferimento all'articolo 9

Ai sensi dell'articolo 9 (3) (c), l'arbitrato sarà esercitato conformemente agli standard arbitrari della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nonché nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) Il Tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri; nel caso in cui questi ultimi non fossero cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

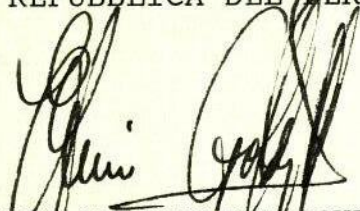
La nomina degli arbitri, effettuata, se necessario, sulla base delle norme UNCITRAL, sarà concordata dalle Parti Contraenti. Entrambe le Parti Contraenti concorderanno, inoltre, la sede ove l'arbitrato dovrà avere luogo.

- b) Nell'adozione delle proprie delibere il Tribunale arbitrale applicherà le disposizioni contenute nel presente Accordo, come pure le norme UNCITRAL su tale specifica materia.

Il riconoscimento e l'applicazione della delibera arbitrale sul territorio delle Parti Contraenti saranno regolati ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, in conformità alle relative Convenzioni internazionali da queste sottoscritte.

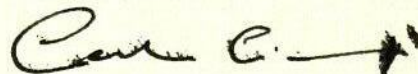
Fatto a Roma, il giorno cinque del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantaquattro, in due esemplari, in lingua castigliana ed italiana, ambedue facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL PERU'



EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro degli Affari Esteri

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



CARLO AZEGLIO CIAMPI
Presidente del
Consiglio dei Ministri



